

Se cumplen un año de las revueltas que tuvieron lugar en los suburbios de numerosas ciudades francesas y la «banlieue» parisina. La gigantesca explosión de violencia que estalló en octubre de 2005 significó la culminación de una profunda crisis nacional en Francia, tanto en aspectos económicos y políticos, como sociales. Pero sin duda, fue el reflejo del estrepitoso fracaso del modelo de integración francés, al haber alimentado gigantescas bolsas de marginación social y segregación espacial sobre los inmigrantes y sus hijos, que durante generaciones han sufrido un deterioro imparable en sus condiciones de vida junto a una discriminación creciente.

Las revueltas, que adoptaron formas bárbaras de rebeldía violenta, fueron protagonizadas por pandillas juveniles de los guetos de los extrarradios, tras el chispazo surgido por un incidente policial, alimentado posteriormente por las declaraciones desafiantes del ministro Sarkozy, quien además de llamar «racaille» (escoria) a los jóvenes de los suburbios, afirmó que limpiaría con Karcher (agua a presión) la suciedad que habitaba en estos barrios, lo que alimentó aún más las llamas de la violencia. Francia, que había vivido en el 68 otra revuelta protagonizada por jóvenes que dedicaban su tiempo a pensar en un mundo distinto, se encontraba ahora ante un ejército de jóvenes descendientes de inmigrantes que, a diferencia de los revolucionarios del 68, dedican su tiempo básicamente a sobrevivir en unos barrios separados geográfica, urbanística y también socialmente del resto de los franceses.

La ciudad de París, que cuenta con unos dos millones de habitantes, se encuentra rodeada de cinturones suburbiales que tienen más de nueve millones de habitantes. Muchos de estos barrios periféricos, pobres y masificados, carecen de equipamientos públicos esenciales, presentando serias dificultades de transporte y comunicación, presentando unas condiciones muy distintas a los barrios más residenciales y selectos, en los que se ha incumplido la obligación de construir en ellos al menos un 20% de vivienda social.

Precisamente, la barriada donde surgieron los conflictos, Cliché-Sous-Bois, fue creada en la década de los sesenta del siglo pasado como un espacio privilegiado rodeado de zonas verdes, que con el tiempo se ha convertido en un paisaje de bloques obsoletos y descuidados, donde se hacinan 30.000 personas: un auténtico gueto rodeado de autopistas y vías de circunvalación, pero con un pésimo transporte público, en el que el 50% de los hogares sobrevive con ingresos mínimos.

De esta forma, el modelo asimilacionista francés ha configurado con el tiempo un cierto apartheid



CARLOS GÓMEZ GIL

## □ PUNTO DE VISTA

sobre la población extranjera que se hacinaba en estos barrios periféricos, en los que el paro dobla la media nacional, sin posibilidades de empleo para los jóvenes por su condición de hijos de inmigrantes, con una discriminación tan gigantesca que les lleva a mantenerse confinados en sus propios barrios y en sus pandillas, como elementos básicos de autoafirmación y defensa frente a un entorno tan hostil. Con ello, los centros urbanos se

# Lecciones para Alicante de las revueltas en los suburbios de París

rehabilitándose otras 40.000.

Ahora bien, aunque las diferencias son abismales, debemos preguntarnos si podemos extraer lecciones de las revueltas de los suburbios franceses para Alicante. Es evidente la gigantesca distancia entre unos procesos migratorios tan antiguos como el francés, muy vinculados a su etapa postcolonial y que durante años ha ido conformando un sistema social, asistencial y educativo destinado a concen-

cial, como sucede con el Plan Rabasa, puede tener un elevado coste para toda la ciudad.

Buena parte de las barriadas donde han tenido lugar las revueltas francesas recuerdan punto por punto muchas de las supuestas excepciones que han tratado de vendernos sobre el Plan Rabasa: barrios en la periferia, desconectados del centro y de la trama ciudadana, rodeados de zonas verdes, atravesados por vías rápidas de circulación

los equipamientos.

Resulta sorprendente ver cómo nuestro Ayuntamiento asiste con pasividad a los procesos de concentración de inmigrantes en un número muy limitado de barrios que son, precisamente, los más antiguos y deteriorados, al tiempo que están siendo abandonados por muchos de sus habitantes autóctonos que se trasladan hacia los barrios nuevos de la periferia, mientras vecinos como los de la zona norte de

Alicante exigen que se frene el profundo abandono de sus barrios, o los comerciantes reclaman una y otra vez una planificación adecuada para un comercio tradicional que en muchas zonas agoniza.

La ciudad exige de una intervención global sobre el conjunto de sus barriadas, pero de una forma preferente sobre los barrios tradicionales e históricos, barrios donde viven los sectores menos acomodados que soportan en mayor medida el peso de la inmigración y el abandono de las políticas públicas.

Y el tercero y último tiene que ver precisamente con la política de inmigración llevada a cabo por este Ayuntamiento. Si tomamos en consideración los esfuerzos que ha hecho por marginar, excluir, cuando no culpar a los inmigrantes de todos los males de la ciudad, llegando

a apoyar campañas contra ellos por atreverse a abrir establecimientos comerciales en el centro, por venir en barco desde Argelia, o ahora por intentar empadronarse y, con ello, tener una mejor integración ciudadana; comprenderemos la gravedad de las políticas que se están llevando a cabo y la invitación que ello supone a la discriminación y la exclusión de los inmigrantes en Alicante.

Es evidente que muchos solo ven en sus planes urbanísticos ladrillos, casas y dinero. Sin embargo, detrás de todo ello hay personas que luchan por vivir en ciudades cada vez más hostiles y sobre las que los poderes públicos y los ayuntamientos tienen que desarrollar políticas activas, responsables y compensadoras de desigualdades; justo lo contrario de lo que sucede en Alicante. Esperemos que se corrijan errores que pueden alimentar conflictos en el futuro. □

## □ La ciudad exige de una intervención global sobre el conjunto de sus barriadas, pero de una forma preferente sobre los barrios tradicionales e históricos, donde viven los sectores menos acomodados

han aburguesado mientras la mezcla social que se reivindica en nombre de los ideales republicanos ha derivado en una segregación social del hábitat en clases, etnias y comunidades. La gravedad de la configuración urbana de muchas zonas masificadas es de tal naturaleza que antes de 2011, unas 250.000 viviendas serán demolidas en diferentes barriadas conflictivas,

trar una inmigración subsidiada en los barrios de la periferia, de las migraciones recientes que está viviendo España y, concretamente Alicante. Sin embargo, tres son los ámbitos en los que deberíamos tomar buena nota de las revueltas francesas a fin de prevenir problemas futuros en nuestra ciudad.

En primer lugar, en el urbanismo, entendido como planificación pública de la ciudad a través no solo de la construcción de edificios, viales y equipamientos, sino mediante la generación de cohesión social, de convivencia e integración cívica, restaurando equilibrios rotos. La política urbanística de este Ayuntamiento, a través de la entrega de la ciudad a los promotores privados, es una apuesta por la segregación espacial y la ruptura de la necesaria cohesión de la ciudad y de sus habitantes. Abandonar la política de planificación pública e integradora sobre toda la ciudad, para permitir que un solo promotor pueda construir en una zona de la periferia cerca de 16.000 viviendas, 8.000 de ellas de carácter so-

pero mal conectados con el centro, con una altísima concentración de vivienda social. Parece como si Viviendas Sociales del Mediterráneo y el Ayuntamiento hubieran tratado de copiar el modelo de barriadas conflictivas francesas.

Un segundo punto es el referido a la necesaria y urgente intervención pública sobre los barrios de Alicante para evitar su marginación y su progresivo deterioro social y urbano. Abandonar las políticas de fortalecimiento de la cohesión social, de reducción de las profundas desigualdades sociales y urbanas que empiezan a darse entre unos barrios y otros, es apostar por alimentar espacios de conflictividad futura. Deben existir políticas urgentes que eliminen la profunda fragmentación que existe entre unos barrios históricos y tradicionales, envejecidos, mal dotados y con importantes carencias, frente a los barrios nuevos situados en la zona de playas y los nuevos PAU, con un flamante parque de viviendas, amplias zonas verdes y de ocio, donde se construyen los nue-



THIERRY BORDAS/EFE

Carlos Gómez Gil es director del Observatorio Permanente de la Inmigración.